

Alejandro Rossi, "Chile, una historia de rupturas y continuidades", artículo elaborado para el seminario *Los frentes de centro-izquierda en el Cono Sur*, Carrera de Ciencia Política, FCS-UBA, noviembre de 1998.

Chile, una historia de rupturas y continuidades

Alejandro Rossi

Introducción

El análisis del Chile de los años noventa y de la alianza que conduce el país desde 1.989, cuando el candidato de la Concertación Patricio Aylwin obtuvo casi el 54% de los votos, no puede ser efectuado sin tomar en consideración la historia chilena de los últimos sesenta años, las características del régimen militar encabezado por Augusto Pinochet, y el tipo de transición a la democracia que se produjo en el país, según ésta sea producto de un derrumbe del régimen militar, incluya elevados niveles de negociación, o sea dirigida por los gobernantes que se están retirando.

La experiencia de una coalición, que algunos caracterizan como de centroizquierda y que gobierna desde hace diez años, muestra la existencia de ciertas continuidades con el régimen militar que la precedió y al mismo tiempo, importantes cambios en el comportamiento político de los actores que fueron protagonistas del gobierno de la Unidad Popular derrocado en 1.973.

Asimismo, las perspectivas de lo que puede ocurrir con la vigencia de los principios democráticos en Chile, particularmente en relación con su posible profundización son inciertas, ya que dependen no sólo del juego de los diferentes grupos políticos y sociales, sino que también deben considerarse circunstancias internacionales que (como la detención de Pinochet en Inglaterra) fortalecen o debilitan la fuerza relativa de estos grupos en la negociación.

Breve desarrollo histórico previo al golpe de 1973

a) Surgimiento y consolidación del "arreglo democrático"

Al igual que otros países latinoamericanos, Chile debió modificar a partir de 1930 su patrón de desarrollo como consecuencia de la crisis que se había originado en la economía mundial y tenía como una característica central la caída en el precio de las materias primas.

Por ello, en el segundo tercio del siglo XX se produjo un vigoroso proceso de modernización social que dio lugar a lo que se conoció como "el arreglo democrático", consistente en la incorporación sucesiva de nuevos grupos sociales a la vida colectiva de la nación, la industrialización apoyada por el Estado y orientada al mercado interno; y la vigencia de un sistema político democrático en constante ampliación (Tironi, 1998).

La industrialización tuvo como característica el rol promotor asumido por el Estado, con la consecuente expansión del gasto, los servicios y el empleo público. Dicha expansión se alojó especialmente en entidades estatales de fomento a la producción (industrial y más tarde ligada al sector agrícola) y en los servicios sociales y la construcción de obras públicas. Se generaba, por otra parte, una relación de dependencia de los empresarios frente al poder público, del cual demandaban créditos, subsidios, protección arancelaria y precios favorables.

Asimismo, este modelo de crecimiento basado en el mercado interno requería la apertura de mercados regionales y sub regionales, y la redistribución del ingreso e incorporación de sectores hasta ese momento marginados, todo lo cual permitiría la ampliación de la demanda de bienes industriales.

Por otra parte, para fortalecer esa demanda se favoreció la expansión de la sindicalización (incluso en el campo) y se masificó la organización comunitaria de base territorial (Juntas de vecinos, Centros de Madres, Centros Juveniles, etc.)

Desde el punto de vista político, puede hablarse de un eficaz sistema representativo con elecciones periódicas, sufragio universal y autonomía del Poder Judicial. El sistema favorecía la organización y representación de los intereses de las diversas categorías y grupos sociales a través de sindicatos, asociaciones profesionales, gremios, etc.

Así se creó lo que fue denominado Estado de Compromiso, porque las principales clases (grupos medios, sectores obreros y empresarios) debían compatibilizar sus aspiraciones por vías institucionales, lo que obligaba a múltiples negociaciones y alianzas (Tironi, 1998).

Paradójicamente la década del treinta, donde se delineó dicho Estado de Compromiso, fue turbulenta, produciéndose la caída de la dictadura de Ibañez, una revolución en 1932 protagonizada por la Fuerza Aérea que proclamó la *república socialista* y a partir de 1936 la creación del Frente Popular, que resistió el avance del fascismo entre los sectores conservadores (Halperín Donghi, 1986).

El momento más conflictivo durante éste período se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que se formó la Acción Chilena Anticomunista, produciéndose la clausura del diario de ese partido "El Siglo". Además, el gobierno del radical González Videla, que había llegado al poder con el apoyo del Partido Comunista, terminó traicionándolo y marginando de los cargos que había ofrecido a sus militantes inicialmente (Corvalán, 1.997).

Con relación a los actores sociales, existió un vasto consenso relacionado con el "arreglo democrático". Las Fuerzas Armadas, pese a que vieron disminuido su presupuesto y su capacidad operacional, dieron su respaldo por largo tiempo, ya que ese arreglo en más de un sentido continuaba la obra modernizadora que los propios militares habían impulsado en los años veinte. Por otra parte, la Iglesia también prestó su apoyo, no poniendo obstáculos mayores a la extensión de la educación pública, al predominio del laicismo y respaldando la industrialización, la reforma agraria y la nacionalización del cobre.

Asimismo, ese proceso se identificó con un vasto movimiento social y cultural que otorgó al Estado la tarea de organización de un sistema de seguridad social y salud pública que permitió mejorar los índices de salubridad del país; la universalización del sistema de enseñanza bajo el predominio del sector público, así como el logro de igualdad de oportunidades de acceso a la educación media y a la enseñanza superior. Además la rápida urbanización del país se apoyó en las políticas públicas, que permitieron solucionar los inconvenientes causados por una rápida migración de trabajadores poco calificados (Tironi, 1998).

Por otra parte, es necesario resaltar que este "arreglo democrático" no era puesto en tela de juicio por ninguno de los grandes partidos chilenos. En 1964 el Partido Nacional decidió no presentar candidato propio a la presidencia y apoyar al postulante del Partido Demócrata Cristiano (creado en 1.957 sobre la base de una organización corporativista denominada Falange Nacional). Esta actitud de la derecha se debió a que en Marzo de ese año se produjo el triunfo del Dr. Oscar Naranjo, militante socialista en la elección complementaria diputados por Curicó, alterando de ese modo las perspectivas para las presidenciales a desarrollarse pocos meses después. Por ello, la decisión de quitarle el apoyo al radical Duran y dárselo a Frei, tuvo como objetivo evitar la llegada de un partido de izquierda al poder (Corvalán, 1997).

El gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei, bajo el eslogan de "Revolución en libertad" intentó imponer una "vía no capitalista de desarrollo" que incluía la expropiación del 51% de las acciones de las compañías productoras de cobre y la reforma agraria, iniciativas promovidas por un sector ubicado en el ala izquierda del partido, en el cual sobresalía la figura del Ministro de Economía Jacques Chonchoi (Casas, 1.991). Asimismo, existió un fuerte respaldo de la población para que se efectuaran importantes transformaciones sociales.

Por otra parte, llevó adelante una política que llamó de Promoción Popular, en virtud del cual se crearon por ley las Unidades Vecinales y las Juntas de Vecinos, y más o menos simultáneamente los Centros de Madres. Además se amplió el derecho de los campesinos a la sindicalización y reformó la educación.

Los demócrata cristianos intentaron adueñarse del centro político, rechazando la posibilidad de tejer un conjunto de posiciones de compromiso para mantener unidos los dos extremos que se enfrentaban. Por el contrario, tomaron la decisión de actuar solos, contribuyendo de ese modo a la polarización de la política chilena en las décadas de 1960 y 1970 (Scully, 1992).

b) Crisis del arreglo democrático

Si bien el proceso de modernización tuvo hasta los sesenta resultados claramente auspiciosos, la incorporación de numerosos sectores incrementó la presión sobre el sistema, la cual se concentraba en el Estado, generando inconvenientes políticos y económicos.

La economía chilena comenzó a demostrar paulatinamente que no podía hacer frente a todas las demandas que desató el proceso de incorporación, produciéndose

junto a la hipertrofia de la administración pública, una inflación crónica y la contracción de la tasa de inversión (Tironi, 1998). Asimismo, existían fuertes distorsiones en el sector externo, ya que las exportaciones estaban concentradas en un 80% en el cobre, al desalentar el sistema cambiado el desarrollo de otras producciones exportables; realimentándose ese modelo en tanto que el cierre del comercio exterior provocaba tal escasez de divisas que empujaba a tentar más sustitución de importaciones basada en una mayor protección (Casas, 1991).

Se incrementó la conflictividad en el país, por lo que, según varios historiadores chilenos, "...los últimos años de la administración de Freí fueron ensombrecidos por un desorden social exteriorizado en huelgas, paros, toma de predios, asaltos a mano armada protagonizados por diversos grupos extremistas..." (Casas, 1991:343).

En el plano político se llegó a una situación en la que los diferentes grupos se vieron imposibilitados de alcanzar un consenso básico acerca de las "reglas de juego" en el que descansara la institucionalidad, abriéndose paso a la utilización por parte de cada grupo los medios propios para resolver los diferendos que se suscitaban.

Todo ello, se sumaba a la existencia de un sistema de partidos caracterizado como pluralismo extremo y polarizado, mostrando la existencia de tres polos políticos claramente delineados, con más de cinco partidos importantes, con imposibilidad de conformar alianzas estables entre ellos y con un alto grado de ideologización, que deja de lado cualquier análisis pragmático de la situación política (Sartori, 1992).

Asimismo la Democracia Cristiana, en el poder se comportó como un partido mayoritario, demostrando un elevado desprecio por las prácticas de negociación que tradicionalmente se habían desarrollado en la política chilena, aunque fracasó en su intento de constituirse en un tercer polo ideológico dentro del sistema (Lopreíte y Tula, 1996).

Por otra parte, este partido había sufrido una escisión de algunos de los sectores más radicalizados y decidió presentar como candidato presidencial a Rodomiro Tomic, perteneciente al ala izquierda de la agrupación, situación que volvía inviable una operación política como la efectuada en 1964 con el objetivo de evitar que un candidato socialista llegara al Palacio de la Moneda.

A esa situación se sumaba la existencia de un sistema electoral muy flexible, con un bajo nivel de cohesión, que tendía hacia un paisaje político fragmentado y polarizado. El sistema de representación proporcional favoreció la creación y sobrevivencia de múltiples partidos políticos.

Además, el Partido Comunista tuvo éxito en su prédica de conformar una alianza que sobrepasara el tradicional acuerdo con el socialismo, atrayendo en cambio al Partido Radical al campo popular. Para favorecer el surgimiento de un candidato único de la Unidad Popular, el PC retiró la candidatura de Pablo Neruda y respaldó la del socialista Salvador Allende. Asimismo, tuvo activa participación en la campaña electoral, dando nacimiento a 14.000 comités de base y reforzando el discurso sostenido por el candidato Allende (Corvalán, 1.997).

Todo ello generó las condiciones para que en 1970 el postulante de la Unidad Popular, coalición de socialistas, comunistas y sectores del Partido Radical, ganara las elecciones con el 36% de los votos, siendo apoyado por los demócrata-cristianos en el Congreso.

El plan de la Unidad Popular se basaba en un diagnóstico, según el cual la crisis chilena se debía a un retraso estructural de la economía, atribuido a tres factores: a) la dependencia externa, b) la estructura monopólica de la industria y latifundaria del sector agrícola, y c) la demanda interna restringida y elitista (Tironi, 1998).

Para superar estas limitaciones se postuló profundizar el modelo desarrollado a partir de 1930, nacionalizando las riquezas básicas (para dejar la renta minera en manos chilenas), expropiando y controlando a los monopolios y latifundios y redistribuyendo los ingresos para modificar la estructura de la oferta de acuerdo con los sectores populares. En ese sentido, se proponía la ampliación de los programas y servicios gubernamentales, a través del aumento del gasto fiscal orientado a satisfacer los requerimientos en los ámbitos de salud, educación, vivienda e infraestructura.

Desde el punto de vista social, se incorporó el reparto del medio litro de leche por día para los sectores más empobrecidos. Uno de cada tres consultorios prestaba atención permanente; creándose además el Tren de la Salud, el cual recorrió gran parte del territorio nacional durante dos años y medio, llevando atención médica y odontológica, especialmente a los campesinos y poblaciones sin acceso a consultorios y hospitales. Se le concedió además atención preferencial a la educación, con una matrícula gratuita en la enseñanza básica y media y tarifas muy bajas para importantes grupos de universitarios. Además se distribuyeron gratuitamente cuadernos libro y útiles escolares y se dio desayuno y almuerzo sin cargo a los escolares de más bajos recursos.

Por otra parte, en el plano cultural se produjeron inmensos cambios, como la constitución de la Editorial Quimantú, que se propuso llevar los libros hasta los sectores más humildes a un precio muy bajo; y la creación en Chile Films, bajo la dirección de Miguel Littin, de un Centro Productor y Distribuidor, dirigido a las poblaciones, sindicatos y otros organismos de masas, circunstancia en la que se produjeron más de veinte largometrajes (Corvalán, 1997).

Las empresas expropiadas o intervenidas fueron manejadas a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), legado del Frente Popular reactivado por la UP para soslayar el veto parlamentario, generando este sector estatizado el treinta y nueve por ciento del Producto Bruto Interno, cuando llegó a estar constituido por más de 400 empresas y 19 bancos, muchos de los cuales fueron comprados por el Estado a sus antiguos dueños.

Asimismo, en el plano económico, se profundizó la Reforma Agraria de acuerdo con la ley aprobada durante el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei, expropiando más de cinco millones de hectáreas y poniendo fin al latifundio. Además, el Estado tenía en sus manos el 90% del comercio de exportación y el 60% de las importaciones y se hizo cargo de la distribución de alimentos y otros bienes a comerciantes y consumidores de todo el país (Corvalán, 1997).

Desde el punto de vista político, Allende no logró construir una mayoría institucional a favor de los cambios que se estaban implementando, no solo porque el país estaba ya hondamente dividido en dos bandos irreconciliables, sino porque sectores importantes de la Unidad Popular consideraban que la materialización de su proyecto pasaba inevitablemente por un enfrentamiento armado y el problema político fundamental era prepararse para emprenderlo en buenas condiciones. Asimismo, puede decirse que el mismo Allende no tuvo la fuerza suficiente para romper con la tendencia a la confrontación, restableciendo un estilo político netamente concertacionista (Tironi, 1998).

Por otra parte, Pinochet y algunos de los militares más cercanos a él, se esforzaron por crear la imagen en la sociedad, que Allende estaba programando un golpe de Estado que le daría poderes extraordinarios, lo cual fortalecía la posición de los actores más proclive a terminar con la experiencia socialista, esgrimiendo su potencial autoritarismo (Casas, 1991).

Desde 1970, las Fuerzas Armadas aparecían como un factor clave para la marcha del país, relacionándose con el gobierno para hacer frente a los paros obreros y huelgas generales, y garantizar las elecciones parlamentarias de 1973. Por ello, tuvieron buenas posibilidades para incorporarse a la táctica de los grupos de derecha, tratando de aislar al Poder Ejecutivo de los altos mandos y generando un creciente descrédito de las instituciones.

De tal modo, la caída del gobierno de la Unidad Popular respondió a una crisis económica y política en el plano interno y a un contexto internacional desfavorable, por la presión de los Estados Unidos. A pesar de obtener algunos índices inicialmente positivos (la distribución del ingreso se hizo más igualitaria, la deuda externa disminuyó) paulatinamente se generaron desequilibrios extremos que en el sistema económico con el alza incontenible de la inflación (400% anual), una caída del Producto Bruto Interno, tanto en la producción minera en su conjunto como en la actividad agropecuaria y la aparición del desabastecimiento, que afectó a productos tan importantes como la carne y la leche. Asimismo, el gasto público creció a límites que dificultaban el funcionamiento del sector empresarial, produciéndose además una puja entre los diferentes grupos para apropiarse del incremento en el gasto (Tironi, 1998).

Incluso, los sectores populares no veían satisfecha su demanda de bienes de consumo, ante las dificultades que se generaban en el sector productivo y en el sector externo, el cual no estaba en condiciones de importar los productos requeridos por este sector, generándose una incapacidad del gobierno para moderar su política redistributiva e imponer orden a los sectores populares.

Las clases altas y medias, claramente afectadas por el accionar gubernamental, incrementaban el malestar de la población con prácticas de acaparamiento y sabotaje económico, como una respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno de la Unidad Popular (Lopreite y Tula, 1996).

Por otra parte, se incrementó el nivel de violencia política, con actitudes crecientemente confrontativas, tanto de los grupos ligados con los empresarios y comerciantes que luchaban contra las expropiaciones e intentos de estatización de sus propiedades, como de los sectores populares que abogaban por la

profundización de los cambios introducidos por el gobierno de la Unidad Popular. Este se mostraba incapaz de poner límites al enfrentamiento, no pudiendo institucionalizar el conflicto tomando el centro de la escena política (Garretón, 1988).

Ya desde principios de 1972 se empezaron a advertir conflictos dentro de la Unidad Popular por las diferentes posturas sostenidas por los distintos partidos ante las manifestaciones de la oposición. Se produjo la Marcha de las cacerolas, realizada por mujeres de los sectores acomodados. Poco tiempo más tarde, en la ciudad de Concepción se llevó a cabo una marcha convocada por la Democracia Cristiana, en la que se produjeron serios incidentes callejeros que culminaron con la muerte de un estudiante de diecisiete años; y cuatro meses después el gobierno decidió derogar el permiso para la marcha de las mujeres de la Papelera, que incluía a numerosos grupos de la derecha tradicional (Corvalán, 1997).

A eso debía sumarse la rigidez atribuida a los sistemas presidencialistas y la extrema polarización del sistema partidario, las cuales contribuyeron a la aceleración de la crisis al dificultar las negociaciones entre las diferentes agrupaciones e incluso dentro de éstas, con el objetivo de superar la variada gama de problemas que se presentaban (Lopreite y Tula, 1996).

En el plano externo, el gobierno estadounidense actuó para profundizar la crisis, con el fin de desestabilizar el régimen de Allende (Tironi, 1998). Ello estaba relacionado con una rectificación, anunciada en 1964, de la política de Estados Unidos hacia América Latina, privilegiando la posibilidad de contar con aliados seguros, más allá que estos fueran o no democráticos (Halperín Donghi, 1986).

El contexto en el que ese vuelco de la política estadounidense se produjo era el de una agudización de la Guerra Fría, luego del fracaso de la guerra de Vietnam y la imposibilidad de lograr un predominio sobre Latinoamérica a través de la Alianza para el Progreso y otros intentos de cooperación en los sesenta.

En tal sentido, tanto la Agencia Interamericana de Desarrollo como el Banco de Exportación e Importación (Eximbank) suspendieron los créditos a Chile. Además se interrumpió por seis meses la compra de cobre y se demandó ante los tribunales de Francia y Holanda el embargo de los cargamentos de cobre chilenos que llegaran a esos países. Por otra parte, se cortó el suministro de repuestos para todo el parque industrial y de transporte de fabricación estadounidense y se puso en práctica un plan de la CIA. para estimular tensiones internas (Corvalán, 1997).

El gobierno militar

a) Reacción y desestructuración del "arreglo democrático"

El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de estado, que no solo puso fin a la experiencia del gobierno socialista de la Unidad Popular (produciéndose ese día el asesinato del presidente Salvador Allende), sino que señaló las limitaciones de lo que Eugenio Tironi denominó el arreglo democrático, que habían engendrado en la sociedad chilena una potente demanda autoritaria como reacción a la larga y

traumática crisis generada en dicho modelo de desarrollo, buscando autoridad en medio del desorden.

Por ello en el año y medio que siguió al golpe, la acción del nuevo régimen fue fundamentalmente de rechazo y reacción respecto de la crisis política, económica y social que aquejaba al país al momento de la caída del gobierno de la Unidad Popular. El recurso del terror fue utilizado para ejecutar sin juicio a prisioneros de la oposición sin la aplicación de los tratados internacionales.

Durante ese primer período se intentó encarar un plan de disciplinamiento y desmovilización de los grupos que habían sido activados anteriormente, así como la restitución de las propiedades nacionalizadas por el régimen de Allende, aunque hasta la consolidación de Augusto Pinochet dentro del gobierno militar no existió un proyecto claro acerca de cómo resolver los problemas que se le presentaban (Tironi, 1998).

El programa que se le presentó al presidente chileno para implementar, tanto por la innovación que significaba como por el fuerte contenido crítico al modelo puesto en práctica durante los últimos cuarenta años fue el de Sergio de Castro, principal exponente de los Chicago Boys en Chile, que no solo formulaba un crudo diagnóstico de la economía chilena sino que también proponía una serie de cambios estructurales que influirían sobre la economía del país.

En un extenso y pormenorizado documento conocido como "el ladrillo" se empezaron a diseñar algunas líneas que orientarían la transformación a partir de 1975: un fuerte programa de reprivatización de empresas, la sustitución de los impuestos directos por aquellos dirigidos al consumo, la ampliación del mercado de capitales, la restricción de la política de remuneraciones, y la apertura al capital externo, todo ello acompañado por la intención de reducir el gasto fiscal y la expansión monetaria (Casas, 1991).

Asimismo, una vez logrado el establecimiento del modelo económico, hacia 1979 se puso en marcha un plan bautizado oficialmente como "las siete modernizaciones" por el cual se trataba de prolongar hacia las diferentes áreas de la sociedad los principios del mercado implantados en la economía. Si bien el esfuerzo se dirigió al conjunto de las políticas sociales, en un principio fue en los campos de la seguridad social y de las relaciones laborales donde el denominado plan modernizador avanzó con más firmeza.

El Plan Laboral en ese sentido reconocía la libre organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, aunque introdujo disposiciones que afectaban la capacidad de negociación de los sindicatos frente a las empresas. Se estableció que la afiliación a un sindicato no era obligatoria, que la negociación se realizaría atomizadamente por empresa, que en caso de conflicto las partes deberían recurrir a la justicia civil (lo cual ponía fin a los tribunales de trabajo) y además junto al derecho de huelga de los trabajadores se consagró el derecho del patrón al lock out (cierre temporal de la empresa) para equiparar las relaciones entre los negociadores. Este tipo de medidas (junto con la eliminación del salario mínimo) estaban destinadas a flexibilizar el mercado laboral y garantizar su eficaz funcionamiento, además de quitarle poder a las organizaciones populares.

Por otra parte, en el plano de la seguridad social se introdujeron principios que modificaron radicalmente el sistema: se reemplazó la capitalización colectiva por la individual, pasando a depender el monto de la prestación del ingreso de cada asegurado, traspasándose además los fondos previsionales desde el Estado hacia las Administradoras de Fondos de Pensión. Esos cambios se relacionaban no solo con la voluntad de marginar al estado de áreas en las que no se lo consideraba imprescindible, sino que además tenían mucho que ver con la ampliación del mercado de capitales, que era un objetivo central del gobierno de Pinochet.

Los resultados del proyecto impulsado por Sergio de Castro fueron notables por su magnitud, tanto por los índices favorables como por los más criticados. El producto Bruto Interno creció un 51% entre 1975 y 1981, acompañando un aumento del crédito y de la inversión, en el marco de una economía que logró alcanzar el superávit fiscal en 1979 y una tasa inflacionaria en franco descenso. Como signos negativos podían observarse el crecimiento del desempleo, un empeoramiento en la distribución del ingreso y el incremento del endeudamiento externo, particularmente del sector privado (Casas, 1991 y Tironi, 1998).

En el plano político, en un primer momento se clausuraron las instituciones representativas y se desarticularon, mediante la represión, las organizaciones que respondían a los grupos sociales radicalizados de izquierda. En el 1974 además se creó la Dirección de inteligencia Nacional (DINA) que desplazó a los sistemas de inteligencia de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas dejando los servicios de inteligencia en manos del general Pinochet.

Solamente la Iglesia Católica pudo brindar apoyo institucional a quienes salían en defensa de los que sufrían los excesos de la dictadura militar. Desde 1974 hasta 1978, años de muy dura persecución, el cuerpo episcopal se esforzó por dar respuestas sólidas a los perseguidos por el régimen, constituyéndose como un hecho trascendental la fundación de la Vicaría de la Solidaridad en 1976. Por otra parte, el 17 de Diciembre de 1982 los obispos realizaron un llamado a luchar por la plena vigencia de la democracia y por los derechos humanos.

Sin embargo Pinochet no se limitó a ejercer esa tarea represiva, sino que a partir de la Constitución política plebiscitada en 1980 intentó institucionalizar el régimen. El propósito fue acentuar la diferenciación y autonomía entre la actividad económica, la participación social y la función política (Tironi, 1998).

Con ese objetivo, en su Constitución y sus leyes complementarias se establecía que los partidos políticos no podían interferir en el funcionamiento de las organizaciones intermedias y que los cargos gremiales eran incompatibles con la militancia política. Asimismo las Fuerzas Armadas eran convertidas en un super poder con funciones de vigilancia sobre todo el proceso político, lo cual realizarían a través del Consejo de Seguridad Nacional que tenía entre sus atribuciones emitir pronunciamientos frente a cualquier autoridad ante lo que considerara un atentado a las bases de la institucionalidad. A eso se agregaban que el Presidente de la República quedaría prácticamente inhabilitado para remover a los comandantes en jefe y los debería nominar de acuerdo a la propuesta de las propias instituciones militares

Se estableció la duración del período presidencial en ocho años sin reelección inmediata (aunque las enmiendas negociadas en 1989 lo redujeron a cuatro). Conforme a la disposición transitoria 14, Pinochet gobernaría durante el primer período de ocho años, lapso durante el cual la Junta de Gobierno, integrada por los comandantes de cada arma ejercería el Poder Legislativo.

Posteriormente en 1988 la junta propondría a la ciudadanía a través de un plebiscito la persona que ejercería la presidencia durante el siguiente período de ocho años, el cual en caso de no ser votado favorablemente debería llamar a elecciones para constituir el Congreso y para nombrar presidente y legisladores antes de un año. Finalmente, se consignaba que el Senado estaría compuesto por 26 senadores elegidos por el pueblo (dos por cada región) a los que se sumarían nueve designados por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad; y también los ex presidentes (Casas, 1991).

b) Crisis y consolidación del modelo pinochetista

Sin embargo, en 1981 el modelo pareció colapsar abruptamente. El alza del 50% en el precio del petróleo y la elevación en la tasa de interés (producto de la rígida política monetaria adoptada por el presidente de la Reserva Federal Paul Volcker) provocaron un freno en la economía mundial y un deterioro en los términos de intercambio de Chile. El corte en el financiamiento externo y la imposibilidad por parte de los empresarios de devolver los préstamos que habían financiado su crecimiento afectaron negativamente a la economía nacional. El Producto Bruto Interno cayó un 14,3 % en 1982, disminuyó fuertemente el consumo, el desempleo se disparó al 25% de la fuerza de trabajo y se produjo una crisis muy profunda en el sector financiero con la liquidación de numerosos bancos y se intervinieron provisoriamente importantes entidades, limitándose los mecanismos de financiamiento de la economía (Casas, 1991; Lopreite y Tula, 1996; Tironi, 1998).

El fin del éxito económico en 1982 y el intento de Pinochet de mantenerse en el poder durante ocho años más generaron una efervescencia social, que tenía la forma de protestas convocadas por las estructuras sindicales y políticas de oposición que culminaban en "cacerolazos" e interrupción de calles con barricadas y fogatas. Esas protestas eran protagonizadas principalmente por grupos de jóvenes marginales urbanos, especialmente de las poblaciones de la periferia de Santiago de Chile.

Los grupos de oposición radical concentraron sus ataques en primer término en las instalaciones públicas y los edificios gubernamentales. Durante 1984 se colocaron bombas en líneas de ferrocarril, servicios y estaciones de radio, y en 1985 se produjeron más de 1.000 atentados terroristas. La violencia de la oposición tuvo su pico más alto en Septiembre de 1986 con el fallido intento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de asesinar a Pinochet (Huntington, 1994).

Sin embargo, esas manifestaciones estaban lejos del tipo de movilización colectiva organizada que se conoció en Chile antes de 1973, ya que en los ochenta no había grupos sociales que pudieran ejercer presión en torno a sus intereses

comunes frente al Estado o a los adversarios sociales, además de no existir canales adecuados de participación para esos grupos.

Por ello, ante el sentimiento de impotencia, el accionar represivo de la policía y el Ejército terminó rápidamente con las protestas, dando lugar a una atomización de la sociedad, en la que los ciudadanos intentaron una adaptación individual, procurando insertarse eficazmente en el sistema.

Por otra parte, Pinochet retomó la iniciativa, y en 1983 nombró Ministro del Interior al veterano dirigente conservador Sergio Onofre Jarpa, e inició una progresiva apertura política. En ese sentido, se relajó la censura a la prensa escrita (aunque la televisión se mantuvo bajo un férreo control) y se concedió un permiso tácito para la actividad de los partidos políticos. Ante esa situación los grupos más radicalizados continuaron con las protestas (incluso con métodos más violentos) mientras que los sectores más moderados reevaluaron su posición debido al temor que se generaba en la sociedad ante la incertidumbre causada por las protestas (Tironi, 1998).

Asimismo, la situación económica fue mejorando paulatinamente, y luego del salvataje hecho desde el Estado a una importante proporción del sistema financiero, Pinochet retomó su intento de convertir a Chile en una robusta economía de mercado. Para ello en 1984 entró en funciones una nueva conducción económica encabezada por Hernán Büchi.

Ya en 1984 el PBI aumentó el 6,3%, demostrando la fuerte capacidad de recuperación de la economía chilena; y en nuevo ministro se encargó de buscar una solución para el sector externo (que había quedado muy deteriorado durante la crisis 1982-1984) para lo que se consideraba imprescindible promover la actividad exportadora, revitalizar la inversión y el ahorro (particularmente el interno) y lograr un manejo adecuado de la deuda externa, la cual se había convertido en una restricción fundamental para la recuperación.

Con el objetivo de lograr estas condiciones para el logro del equilibrio macroeconómico se elevó el tipo de cambio, se eliminaron impuestos a las exportaciones y se bajaron los aranceles a las importaciones, se simplificaron los trámites comerciales y se mejoró la infraestructura y el funcionamiento de los puertos. Por otra parte, se eliminó el impuesto a la renta sobre las utilidades reinvertidas y se hicieron grandes esfuerzos para atraer inversiones desde el exterior. Asimismo, el ahorro y la inversión, durante este período, se vieron favorecidos por las privatizaciones y los sistemas de capitalización de la deuda (Casas, 1991).

Como un complemento de esos cambios macroeconómicos se produjeron un conjunto de transformaciones en las políticas sociales, que profundizaron la línea descentralizadora y favorable a la competencia adoptada por el gobierno nacional. En el campo de la salud se produjo en primer término la desaparición del Servicio Nacional de Salud, que fue desmembrado en 27 servicios regionales autónomos, traspasándose la administración de los consultorios periféricos a las municipalidades.

Además, se buscó canalizar el gasto público a través de un sistema de bonos, de tal modo que los aportes recibidos por los establecimientos públicos fueran

proporcionales al número de atenciones prestadas, incentivando así la competencia entre ellas. Por otra parte, se promovió el fortalecimiento de la medicina privada, con la autorización de la formación de Instituciones de Salud Previsional, a través de las cuales los afiliados podían elegir en el mercado los beneficios médicos en proporción a las cotizaciones (Tironi, 1998).

Algo similar ocurrió en el área de la educación donde se traspasaron los establecimientos educacionales fiscales a las municipalidades (a partir de 1985, el Estado dejó de administrar establecimientos educacionales) y se estimuló la educación privada con el otorgamiento de financiamiento estatal a los sostenedores. Asimismo, se dio un nuevo impulso a programas estatales de subsidio en los hogares afectados por la pobreza crítica, administrados descentralizadamente por las municipalidades, buscando evitar "filtraciones" de recursos hacia otros grupos como había sucedido en el pasado (Tironi, 1998).

Como consecuencia de todas esas modificaciones económicas y sociales, se produjo una caída de la desocupación al 10%, aunque la distribución del ingreso se volvió más regresiva, participando en el consumo el 40% más pobre de la población solo en un 12% en 1988. Por otra parte, algunos autores como Tironi caracterizan a la sociedad chilena como una sociedad dual, donde una porción de la población fue excluida de los beneficios de la modernización, estableciéndose además claras diferencias entre las políticas sociales que se aplicaban para los pobres y para los ricos (Casas, 1991; Lopreite y Tula, 1996; Tironi, 1998; Scully, 1998).

Desde el punto de vista político, posteriormente a 1985 se comenzaron a promulgar las llamadas "leyes políticas", las cuales debían ser sancionadas por el Tribunal Constitucional, que tenía por objeto velar por el cumplimiento de un plebiscito sujeto a las reglas democráticas básicas. Entre esas leyes estaban la que creó el Registro Electoral y la norma que legalizó la existencia de los partidos políticos, aunque bajo ciertas restricciones de tipo ideológico y administrativo, destinadas a marginar al Partido Comunista. También se promulgaron la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley de Votaciones y Escrutinios y las normas sobre publicidad en radios y televisión.

Hacia 1987, cuando las protestas ya habían desaparecido, se había producido un fallido atentado contra el presidente, y la situación social mostraba signos de estabilidad, los partidos de oposición, con la excepción del PC, decidieron aceptar la Constitución de 1980 y enfrentar al general Pinochet al interior de su propia institucionalidad, llamando a la inscripción en los registros electorales y ellos mismos registrándose de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos (Tironi, 1998). Por otra parte, el hecho que Pinochet impusiera su propia candidatura favoreció las posibilidades de la oposición en el plebiscito convocado para 1988, ya que representaba los aspectos más duros del proceso iniciado en 1973.

Ya en 1985, el Secretario de Estado Adjunto del gobierno norteamericano Motley y el embajador de ese país James Thely plantearon que pese a las imperfecciones de la Constitución del 80, era imposible iniciar un diálogo fructífero sin aceptar la legitimidad del gobierno para fijar las reglas de juego y sin sentar una clara posición frente al Partido Comunista, por el potencial perturbador que podría tener para los militares (Corvalán, 1997).

Por ello la oposición, formada básicamente por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista en sus diversas corrientes y el Partido Radical, no tuvo grandes dificultades para deponer sus diferencias y conformar a comienzos de 1988 el "Acuerdo por el No" que se transformó posteriormente en la "Concertación de Partidos por el No". La estrategia apuntó centralmente a dar legitimidad al sistema institucional, para persuadir a la población de inscribirse en los registros electorales, descartando de plano cualquier ruptura traumática tanto en materia política como económica.

En 1987, también se creó el Partido por la Democracia (PPD), el cual formó parte de la Coalición por el No y posteriormente de la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta nueva agrupación no planteaba una ruptura violenta con el régimen pinochetista, sino que postulaba reconquistar la democracia por medio de la movilización pacífica, y formar una amplia coalición política para conseguir una genuina democratización y una auténtica modernización e integración social.

Incluso en la franja de publicidad gratuita establecida por la legislación, los grupos opositores moderados buscaron identificarse con los valores de la paz y cohesión social, di reencuentro con la continuidad histórica y la unidad nacional (Tironi, 1998). La campaña del No hizo suya la hipótesis según la cual la sociedad chilena había atravesado por un período largo de desintegración y que la demanda básica de los chilenos se dirigió a la reconciliación y al robustecimiento de los lazos de integración social, por lo que el mensaje hizo hincapié en el respeto a la dignidad de las personas y en la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la modernización económica, aunque sin revertiría. Eso quedó plasmado en el lema de "...votar no, sin miedo, sin odio y sin violencia, prometiendo que era posible alcanzar cambios políticos sin traumas y sin trastornos ni rupturas en el plano económico..." (Tironi, 1998:113).

La formación de la Concertación no se produjo sólo por la emergencia de "fractura" autoritarismo - democracia en Chile, superadora de las contraposiciones previas, sino que también existieron cambios relacionados con la experiencia que muchos políticos e intelectuales de izquierda tuvieron durante el régimen militar, que afectaron sus valores y formas de comportamiento. En primer lugar, se ejerció un profundo proceso de autocrítica que llevó a poner al desnudo los límites de la propuesta histórica de la Unidad Popular y los errores de su gobierno. De ahí que con el objetivo de dotar de mayoría política a un proyecto de cambio en el país, era necesario abrir un canal de diálogo con los dirigentes de la Democracia Cristiana y más precisamente con sus intelectuales (Tironi, 1998).

Por otra parte, la valoración de los derechos humanos durante el régimen militar llevó a numerosos grupos de izquierda a trabajar codo a codo junto a la Iglesia Católica, primero en el Comité por la Paz y luego en la Vicaría de la Solidaridad. Este contacto transformó hondamente la cultura de la izquierda en el tema de los derechos humanos, al empezar a admitir que ellos eran el límite ético de toda acción política.

Finalmente, muchos de los exiliados tuvieron la oportunidad de estudiar y trabajar en sociedades más desarrolladas, lo cual les entregó una nueva visión del mundo y fundamentalmente de Chile. De ese modo, este grupo de políticos e intelectuales pudo internalizar la crisis del socialismo y "...aprender de primera mano el valor de la

democracia, las ventajas de libertad económica, el significado de la igualdad de oportunidades, el poder de la cultura y las comunicaciones, la riqueza de la tolerancia y el significado de la globalización..." (Tironi, 1998:141).

Por último, el Partido Comunista, advirtiendo que el resto de la oposición aceptaba el marco impuesto por Pinochet, decidió llamar a inscribirse en los registros electorales y a votar por el No en el plebiscito, acompañando todos los movimientos sociales que pudieran favorecer la caída del régimen (Corvalán, 1997).

3) Transición a la democracia

Finalmente en Octubre de 1988 el No ganó el plebiscito con el 54% de los votos, con lo que de acuerdo a la Constitución aprobada en 1980, el gobierno de Pinochet debía convocar a elecciones en el término de un año para elegir al próximo presidente.

El proceso de democratización chileno es calificado por el politólogo estadounidense Huntington como de "transformación", donde el régimen militar es el que organiza las pautas para la cesión del poder desde el marco de la legalidad establecida por él mismo en 1980 (Huntington, 1994).

En ese período, que se extendió entre el triunfo del No en el plebiscito y el llamado a elecciones, Pinochet no solo se preocupó por garantizar la aceptación de los elementos de continuidad insertos en la Constitución (imposibilidad de remover al Jefe de las Fuerzas Armadas, incorporación en el Parlamento de un grupo de senadores vitalicios designados por el régimen, etc.) sino que convocó a la Concertación para consensuar una serie de reformas legislativas que garantizaran buenas oportunidades electorales a los grupos de derecha (Tironi, 1998).

La Ley Electoral indicaba que para las elecciones de senadores y diputados cada distrito electoral elegiría dos candidatos, produciéndose la situación que para que una lista obtenga las dos bancas de una circunscripción, deberá duplicar el total de los votos de la segunda lista. Asimismo los límites de los distritos electorales fueron retocados con el fin de lograr una sobrerrepresentación de las áreas rurales que habían sido favorables a Pinochet en el plebiscito de 1988 (Scully, 1998). Este sistema binominal tenía por objetivo lograr la moderación y corrimiento hacia el centro de los planteamientos de las fuerzas políticas (Marín Vicuña, 1986).

El sistema propuesto combinaba el sistema mayoritario con el proporcional, pues para ser elegido diputado se requería "... haber obtenido la mayoría más alta en la lista, y además la lista respectiva haber obtenido la cifra repartidora, salvo que alguna lista logre dos cifras repartidoras, pues en ese caso elegiría los dos diputados del distrito...". En tal sentido, se consideraba que era necesario proteger a los grupos de "centro derecha", precisamente para evitar los excesos a que dan lugar las combinaciones del centro con los partidos de izquierda, en especial con los marxistas (Documento oficial, pág. 7).

De tal modo, considera el jurista Marín Vicuña, que la fórmula binominal es democrática porque permite gobernar a las grandes mayorías, favoreciendo la

posibilidad que valores como la libre iniciativa privada, la no discriminación económica arbitraria y la injerencia del Estado en la economía solo de modo subsidiario estén asegurados (Marín Vicuña, 1986). Se procuraba convalidar la tendencia a no aplicar o propiciar políticas radicales y asegurar una alta valoración del orden y la estabilidad social en general.

Se postulaba que un sistema electoral uniforme, que eligiera pocos representantes en cada distrito podría contribuir a dificultar el multipartidismo y "...a dar expresión parlamentaria a conglomerados políticos que sean representativos de las grandes líneas, de las líneas gruesas que mueven la política del país, y no de los matices, parcialidades o lideratos locales y personales..." (Marín Vicuña, 1986:144).

Asimismo, se intentaba crear un "centro cualitativo" llevando a los diferentes partidos a presentar candidatos que conquisten votos de todo el espectro social y no solo de grupos determinados que se ubicaban en la posible clientela electoral del partido. Esta situación crearía una tendencia que produciría una fuerza centrípeta que atrae hacia la moderación. La fórmula binominal era una oportunidad para el centro "... pues abre la posibilidad de que moderados de todas los sectores se unan para gobernar..." (Marín Vicuña, 1986:145).

Por otra parte, es necesario ver como dentro del régimen autoritario y entre los opositores existieron diversas tendencias que favorecieron la transición. Dentro de la coalición autoritaria, los sectores civiles se encontraron divididos en dos campos opuestos: por un lado los "duros" que se consideraron herederos directos del régimen militar y depositarios de los aspectos más restrictivos de la versión de democracia protegida expuesta en la Constitución de 1980; y por otro los blandos (nucleados en Renovación Nacional) que intentaron distanciarse de los aspectos más represivos del régimen de Pinochet y ocupar el espacio electoral que tradicionalmente había correspondido a la derecha democrática (Scully, 1998).

En el plano de la oposición democrática, además de la discusión entre maximalistas (que incorporaban mecanismos violentos para luchar contra el régimen) y moderados que aceptaban la institucionalidad impuesta por Pinochet, también se manifestaron diferencias posteriores al plebiscito de 1988 dentro de los partidos de la Concertación entre grupos que postulaban o aceptaban el predominio de la Democracia Cristiana, los sectores favorables a la formación de amplias coaliciones (lo que suponía incluir al PC) y quienes procuraban coaligarse hacia la izquierda con el Partido Comunista (Lopreite y Tula, 1996).

Además, en el año 1989 se decidió modificar la Constitución, para legalizar al Partido Comunista, de modo de poder incorporarlo al juego democrático, generando las condiciones para que abandonara cualquier táctica insurreccional y violenta.

Finalmente, aprovechando la creciente liberalización posterior al plebiscito se llevó a cabo un acuerdo electoral entre todos los componentes de la coalición democrática a fin de presentar un solo candidato para las elecciones presidenciales de 1989, el cuál fue acompañado por un pacto que tenía por objetivo formalizar el respeto por la diversidad en la composición de la coalición y evitar la fragmentación de la misma, así como también fijar las políticas que se llevarían a cabo en la futura administración. De este modo se produjo la primera instancia de liberalización en el

régimen autoritario que desembocaría posteriormente en el proceso posterior de democratización (Lopreite y Tula, 1996).

El politólogo Samuel Huntington resalta para el caso chileno que la cooperación por parte de la oposición democrática y la modernización de las propuestas explicitadas por ésta fueron esenciales para el buen resultado de la transformación. La elección del demócrata cristiano Patricio Aylwin como candidato por la Concertación fue muy importante para evitar que las considerables provocaciones por parte de los grupos ultraconservadores en el gobierno pinochetista pudieran alterar los plazos y las características de la transición democrática en la que se había embarcado la sociedad chilena (Huntington, 1994).

4) La democracia chilena en los noventa

Tras la convocatoria a elecciones, el representante de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin alcanzó la presidencia al obtener un 55,2 % de los votos, dejando atrás a los candidatos de la derecha, el ex ministro Hernán Büchi quien obtuvo un 29,4 % de los sufragios y el candidato Francisco Errázuriz, (un empresario que compartía los cambios efectuados durante el régimen pinochetista, aunque buscando una moderación en los costos) votado por el 15,4 % de los electores.

En términos económicos, el gobierno de Aylwin no se desvió de la orientación favorable al libre mercado del régimen autoritario, aunque encaró importantes cambios en materia impositiva y en el gasto social (Scully, 1998). Para obtener más recursos, el ministro Alejandro Foxley aumentó el Impuesto al Valor Agregado en dos puntos y estableció un impuesto del 10 % a las ganancias de las empresas, argumentando que las crecientes utilidades de las sociedades durante la década del ochenta las ponían en condiciones de absorber dicho tributo sin mayores inconvenientes (Casas, 1991).

Asimismo, tomando en consideración que el gobierno le otorgaba al sector exportador un papel muy dinámico como generador del crecimiento económico y que la gran cantidad de inversiones produjo la revaluación del peso y por ende perjudicaron la competitividad de los productos chilenos en el exterior, fue necesario tomar una serie de medidas tendientes a moderar el ingreso de fondos externos; se facilitaron las inversiones directas chilenas fuera del país y se autorizó a los bancos nacionales a invertir en el exterior hasta un 25% de sus depósitos en dólares.

Además, se bajó el arancel uniforme de importación del 15 al 11%, con el objetivo de estimular las importaciones y disminuir el superávit comercial. Como un complemento de esto, se retomó el antiguo sistema de minidevaluaciones conforme a la inflación doméstica menos la internacional. En contrapartida, para recuperar la recaudación perdida por la rebaja del arancel, se incrementó en un 50% el impuesto a la gasolina y se gravó a los préstamos domésticos de igual forma que a los provenientes del exterior (Casas, 1991).

Por otra parte, claramente conciente del rol que la integración económica jugaría en el desarrollo del país, el gobierno de Aylwin fue muy cuidadoso en su relación con

los países del MERCOSUR (al cual se negó a entrar) argumentando que era necesario llegar a niveles de inflación relativamente similares y lograr políticas monetarias y cambiarias coherentes, así como establecer un arancel externo común que no perjudicara la apertura económica que le había permitido al país tener altos niveles de competitividad y acceder a tecnología de avanzada (Casas, 1991).

Los resultados del primer gobierno de la Concertación fueron muy favorables. En el período 1989-1993 la tasa de crecimiento promedió el 6% (con picos como el 10,3% de 1992), el nivel de desempleo cayó progresivamente hasta alcanzar el 4,9%, con una inflación del 11,5% anual y con altos niveles de inversiones en capital (27,2% del PBI) y de ahorro interno (21% del PBI). Asimismo, mejoró la distribución del ingreso, cayendo la participación en él del quinto más rico de la población de un 59,9% en 1989 a un 54,7% en 1991 (Scully, 1998).

Como plantea Timothy Scully, el Estado chileno "...está experimentando su propia transición del Estado predominantemente empresarial de los años de industrialización sustitutiva de importaciones, al Estado regulador contemporáneo..." (Scully, 1998:61). Esta búsqueda de regulaciones claves se produce porque los operadores, el gobierno y los usuarios necesitan reglas claras para que los servicios sean suministrados de manera eficiente, así como también es necesario dotar de mayor competitividad a la economía, sin que se produzca una apropiación excesiva de las utilidades por parte de las empresas privatizadas.

Otro área en la que el gobierno de la Concertación actuó en forma diferente al régimen militar fue la de las políticas sociales, con "...un esfuerzo social creciente en los campos de la salud, vivienda, educación y previsión..." (El Mercurio, Santiago de Chile, 24 de Octubre de 1990). El gasto público en programas sociales se incrementó de un 9,9% a un 11,7%, aumentando el gasto social un 30% en términos reales entre 1989 y 1993. En ese campo, el gobierno chileno estaba destinando más de 6 mil millones de dólares en diversas iniciativas que incluían programas de entrenamiento y orientación vocacional para jóvenes, un amplio programa de salud y un ambicioso emprendimiento para la construcción de viviendas públicas a bajo costo (Scully, 1998).

Las desigualdades generadas en la sociedad chilena durante los diecisiete años del gobierno de Pinochet fueron abordadas a través de dos ejes: a) la implementación de políticas sociales que aseguraran a todos los chilenos el acceso a los servicios básicos que les permitieran integrarse al desarrollo y b) el fortalecimiento de la capacidad negociadora del sector laboral, que posibilitara el mejoramiento de la calidad de vida de quienes ya estaban incorporados en el mercado de trabajo y así generar mayor difusión de los beneficios del crecimiento (Scholnik, 1.994).

Con respecto a la salud y a la educación, sí bien se mantuvo la descentralización y la administración municipal, se observaron algunos cambios importantes. En el primer área, se puso énfasis en la prevención (cosa que no ocurrió en el caso argentino), se mejoraron las remuneraciones de los trabajadores, se construyeron nuevos hospitales y se compraron equipos más modernos. En educación, en 1990 se implemento un programa destinado a mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas básicas más pobres para poder de ese modo reducir las diferencias de calidad entre escuelas subvencionadas y privadas pagas.

Con relación al mercado de trabajo, se buscaba superar las restricciones impuestas por el régimen militar a la actividad sindical, aunque evitando la ideologización y la polarización características del gobierno de Allende, para lo cual se buscó implantar una legislación que proponía negociaciones directas entre el capital y el trabajo, sin que el gobierno participara directamente en ellas, excepto en los casos en que fuera necesario recurrir al arbitraje (Lopreite y Tula, 1996).

Asimismo, con el objetivo de transferir recursos hacia los sectores de menores ingresos se decidió reajustar los salarios mínimos, las asignaciones familiares, las pensiones y efectuar la reprogramación de las deudas hipotecarias para los sectores más pobres.

Como un producto del crecimiento de la economía y de la aplicación de esas políticas, el número de chilenos viviendo en condiciones de pobreza bajó entre 1990 y 1992 en cerca de un millón de personas, de un 40,1% a un 32,7 de la población (Scully, 1998). Esta disminución en los índices de pobreza fue factible porque no alteró las reglas básicas del modelo económico, aunque la aceptación de las principales líneas impuestas durante el régimen militar dificultó la posibilidad de lograr una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento económico (Repetto, 1998).

Desde el punto de vista político puede verse que el partido predominante dentro de la Concertación ha sido la Democracia Cristiana, convirtiéndose el Partido Socialista en un socio menor, que ha aportado sin embargo gran cantidad de ministros y dirigentes al gobierno. En la oposición, se han destacado los partidos sindicados como continuadores del régimen. Por un lado, Renovación Nacional, con el fuerte liderazgo de Andrés Allamand, el cual se definió como partido *liberal* y criticó las violaciones a los derechos humanos, la lentitud del tránsito a la democracia y la llamada "democracia protegida" que surgió de la constitución de 1980. Por otra parte, la Unión Democrática Independiente, se reivindicó como un partido *popular, cristiano y pro economía de mercado*, cuyo líder, Jaime Guzmán, también criticaba a Pinochet la lentitud en el tránsito a la democracia. Estas críticas de los partidos de derecha no conllevaron, sin embargo un compromiso decidido de modificar el legado pinochetista en el plano institucional, particularmente la Constitución.

El tercer postulante importante de las elecciones de 1989, Francisco Errazúriz , definió a su partido como el verdadero representante del centro político y entre sus principales posturas sostuvo la necesidad de integración económica, la desregulación, la compra de la deuda externa y la continuidad de las privatizaciones, aunque con críticas a algunos aspectos programáticos de la UDI y de Renovación Nacional que eran caracterizados como la continuidad del régimen pinochetista.

Si bien la derecha tenía un poderío electoral muy importante, acrecentado por el régimen electoral, a lo que se le sumaba una cantidad de legisladores designados por el gobierno militar, tuvo una actitud de colaboración con el gobierno de Aylwin, el cual según el senador de la UDI Jaime Guzmán, gobernaba por encima de los partidos. Incluso, en la elección del presidente del Senado, se decidió apoyar al candidato de la Concertación por el hecho que se trataba del segundo en la línea sucesoria presidencial, por lo que hubiera sido una permanente fuente de tensiones la ocupación de ese lugar por un pinochetista (Casas, 1991).

Aylwin aceptó las limitaciones para castigar a los militares por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, aunque designó una comisión, llamada Verdad y Justicia, para investigar lo ocurrido, e inmediatamente después de haber asumido liberó a los presos políticos del régimen de Pinochet que no habían cometido actos de violencia en ese período (Huntington, 1994).

Al frente de la comisión investigadora se nombró al ex senador y jurista Raúl Rettig, el cual entregó un informe el 8 de Febrero de 1991 donde se confirmaban 2279 casos de muertes y ejecuciones sumarias de opositores, torturas y cientos de desapariciones cometidas entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990. Asimismo, el gobierno de la Concertación manifestó que si bien los responsables de esos crímenes no serían procesados, las víctimas y sus familiares serían compensados.

Pinochet, pese a que manifestó subordinación al presidente electo, ha utilizado la fuerza para presionar y oponerse a determinadas decisiones del poder civil. En Diciembre de 1990 mientras altos líderes militares (incluido el hijo del General Pinochet) sobrellevaban un proceso judicial por mal uso de fondos gubernamentales, el ejército acuarteló sus tropas, aunque no contó con la complicidad de la Fuerza Aérea y de los carabineros por lo que la crisis fue rápidamente superada. Posteriormente, en Mayo de 1993, preocupado por una nueva interpretación de la Ley de Amnistía de 1978 que permitió a los tribunales investigar las violaciones de derechos humanos, Pinochet llamó a las unidades del Ejército al Cuartel General y rodeó a los edificios públicos del centro de Santiago de Chile, situación que provocó un fuerte rechazo por parte del presidente Aylwin y de la mayoría de la población (Scully, 1998).

Sin embargo, autores como Tomás Moulian, critican el manejo del tema de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, ya que argumentan que la labor de la Comisión Rettig tuvo dos grandes vacíos, en el sentido que sus investigaciones no derivaban en una instancia judicial y por otra parte, no comprendían a los damnificados por torturas prolongadas y prisión abusiva. Se instaló en tal sentido un principio de la irresponsabilidad de las autoridades supremas, las cuales parecieron no saber nada de las violaciones a los derechos humanos Sin embargo, autores como Tomás Moulian, critican el manejo del tema de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, ya que argumentan que la labor de la Comisión Rettig tuvo dos grandes vacíos, en el sentido que sus investigaciones no derivaban en una instancia judicial y por otra parte, no comprendían a los damnificados por torturas prolongadas y prisión abusiva. Se instaló en tal sentido un principio de la irresponsabilidad de las autoridades supremas las cuales parecieron no saber nada de las violaciones llevadas a cabo por sus subordinados (Moulian, 1997).

Desde el punto de vista institucional el sistema electoral binominal por distrito ha generado consecuencias importantes para los partidos políticos más grandes ya que, en primer lugar las negociaciones preelectorales entre líderes partidarios en el seno de una alianza tienen un rol decisivo en la selección de candidatos en cada distrito, situación que deriva en misteriosos acuerdos ínter e intrapartidarios que tiene como resultado reacciones contrarias entre los miembros del partido que ven en estos cálculos oportunistas de los líderes nacionales y un intento de violar la voluntad popular (Scully, 1998).

Esta práctica, no sólo ha tenido costos para los socios de la Concertación, sino que ha generado profundas divisiones entre los sectores de derecha, que encuentran muy difícil consensuar las candidaturas en distritos donde sólo pueden aspirar a conseguir una banca. Esta situación hace que las negociaciones preelectorales y la competición electoral dentro de la alianza Unión para el Progreso de Chile sean intensamente competitivas.

En el plano partidario, la intención del régimen autoritario de terminar con los partidos políticos fracasaron, ya que éstos sobrevivieron y reemergieron con fuerza a fines de la década del ochenta, aunque (según el modelo del politólogo italiano Giovanni Sartori) el formato y la dinámica del sistema de partidos se revelaron muy diferentes. Sí bien hoy en día persisten los mismos componentes del sistema precedente al golpe de 1973 "...ellos están estructurados de manera diferente, y si bien- siguen en escena muchos de los mismos actores de antaño, ellos desempeñan hoy papeles distintos..." (Tironi, 1998:117).

Entre los cambios más importantes pueden citarse dos: 1) el paso de lo que Sartori llama un sistema múltipolar que gira en torno a un centro (con la izquierda en un extremo y la derecha en el otro) cuya dinámica tiende a ser centrífuga, a un sistema bipolar donde los pivotes del sistema de partidos son dos polos y cuya dinámica tiende a ser centrípeta, y 2) el paso de un pluralismo polarizado con una gran distancia ideológica entre los partidos y ninguna capacidad de crear coaliciones duraderas, a un pluralismo moderado con menos distancia ideológica y una competencia de ambas coaliciones por los votos del centro.

Otra característica central del nuevo sistema de partidos es su relativa inmunidad frente al fenómeno de la volatilidad. El electorado chileno ha permanecido fiel a las dos coaliciones surgidas del plebiscito de 1988. Los movimientos se dan entre los partidos que forman las alianzas, pero no entre éstos. Al respecto el ex Ministro de Economía y líder de la Democracia Cristiana Alejandro Foxley señalaba que en el caso de la Concertación "...los incentivos para seguir juntos son mucho mayores que los que pudiera haber para desarmarla y que tienen que ver con la posibilidad de formar parte del cuadro de dirigentes del país..." (Diario La Época, 21 de Septiembre de 1997).

Las estrategias políticas basadas en la premisa que el esquema de dos coaliciones se extinguiría conforme el período autoritario fuera quedando atrás, para dejar paso nuevamente a los tradicionales tres tercios, de hecho han fracasado. En particular, el intento del Partido Comunista de recomponer el eje comunista - socialista, para dar vida de nuevo al tercio de izquierda. Esta búsqueda resultó infructuosa, debiendo contentarse el PC con crear un polo que agrupa a la antigua ultraizquierda, sin contar con el socialismo histórico en ninguna de sus ramas (Tironi, 1998).

La presidencia de Eduardo Frei, alcanzada en 1.994 con un 58 % de los votos frente al candidato de la coalición de derecha Arturo Alessandri Bessa, no trajo cambios significativos en el modelo político pautado por el régimen militar, ni tampoco en el programa económico a implementarse. Pinochet, cumpliendo lo previsto por la Constitución de 1980, se ha retirado del Ejército y ha asumido como senador vitalicio, situación que ha dado lugar a una acusación constitucional por

parte de un conjunto de diputados de la Concertación, aunque sin mayores consecuencias.

Dentro del gobierno continuó existiendo una supremacía de la democracia Cristiana, aunque la participación del Partido Socialista siguió siendo importante. Para las elecciones de 1999, la Concertación debe definir aún su candidato, siendo los precandidatos Ricardo Lagos, por el socialismo y Andrés Zaldívar por los demócrata cristianos. Pese a que existió un proyecto de la Concertación para que se efectuaran primarias abiertas, la derecha rápidamente lo bloqueó, argumentando que eran votaciones populares y que estas solo podían elegir representantes de la Unión y no candidatos de partidos políticos.

Las diferencias que persisten en la Concertación se pusieron de manifiesto en el Parlamento antes de la asunción de Augusto Pinochet como senador, según lo estipulado por la Constitución de 1980. Varios diputados jóvenes de la Democracia Cristiana realizaron una acusación constitucional contra el ex mandatario por diversas violaciones a los derechos humanos y haber pretendido quebrantar la vigencia del Estado de Derecho en Diciembre de 1990 y en Marzo de 1993. La acusación fue rechazada por 62 votos contra 52, produciéndose un conflicto dentro de la Concertación, ya que 11 legisladores demócrata cristianos votaron por la negativa (Crónica, 12 de Septiembre de 1998).

En el plano económico también primaron las continuidades, obteniéndose índices de crecimiento superiores al 7% hasta 1997, con una inflación controlada, bajo nivel de desempleo, solidez del sistema financiero y elevado nivel de reservas. Sin embargo, la crisis asiática desde mediados de 1997 afectó negativamente el precio de las exportaciones chilenas; así como la profunda recesión en muchos de los principales clientes ha dificultado el crecimiento de la economía.

Por ello, el Banco Central eliminó los controles de capital, en un intento por atraer dinero hacia el país, con el objetivo de reactivar rápidamente la economía (Clarín, 27 de Septiembre de 1998). Asimismo, el Ministro de Hacienda Eduardo Aninat llamó a todos los sectores económicos y políticos nacionales para consensuar una limitación en el gasto público, el freno a las demandas salariales excesivas, recortar el aumento del presupuesto del 2,8% y bajar las expectativas de crecimiento para 1999 (El Mercurio, 15 y 27 de Septiembre de 1998).

Por otra parte, previendo la disminución en el crecimiento de la actividad económica, el gobierno decidió aplicar ciertas medidas dirigidas al área de las políticas sociales para paliar las dificultades de los sectores de menores ingresos. Se incrementó la asignación de fondos para créditos CORFO y becas universitarias. Además, en conjunto con la oposición se procuró redestinar las inversiones previstas para las empresas del Estado y aumentar las pensiones (El Siglo, N 873, 3 al 9 de Abril de 1998).

¿Lo que vendrá?

Hasta el momento, los intentos del gobierno de la Concertación para remover los componentes antidemocráticos han resultado infructuosos. Los aliados del régimen

de Pinochet han utilizado la presencia de sus colegas elegidos, para vetar la legislación que consideraban incompatible con la herencia institucional del régimen militar. En ese sentido, puede decirse que mientras los gobiernos de Aylwin y Frei han tenido mucho poder para llevar a cabo políticas económicas liberales, su capacidad para consolidar un régimen político liberal fue bastante reducida (Scuily, 1998).

Un elemento que ha ido adquiriendo importancia y que debe considerarse como un factor de incertidumbre, ya que no se sabe cuál será la influencia sobre los alineamientos políticos, es la pérdida de interés de la población por la política. La caída en los índices de participación electoral, así como las actitudes ante la política y los partidos que revelan las encuestas, muestran un alejamiento, desconfianza y desafección frente a la política en general, que incluye gobierno, parlamento, coaliciones, partidos y políticos como personas (Tironi, 1998).

La disminución de la participación electoral ha sido significativa, principalmente entre los jóvenes: entre 1988 y 1996 el peso de los inscriptos en el tramo de 18 a 24 años bajó del 21,2% al 9,1%, en circunstancias en que representaban el 18% de la población total (cerca de un millón y medio de jóvenes rehusó inscribirse para las elecciones parlamentarias de 1997). Además, se observó un consistente aumento en la abstención que subió del 2,5% en el plebiscito de 1988 a un 15,6% en la elección municipal de 1996 y a 13,7% en la parlamentaria de 1997. Asimismo, en esta última elección creció el voto nulo al 13,6% y el voto en blanco ascendió al 4,2% (Proyecto CNEP, Chile).

Por ello, se plantea que el enfriamiento en la participación política no pone en peligro la continuidad del régimen democrático, ni constituye una amenaza para el paisaje político actual, fijando lo que Tironi caracteriza como un alineamiento basado en "...el dominio de la fisura autoritarismo - democracia..." (Tironi, 1998:30). Este mismo autor considera que más allá del corto plazo, es posible especular que la apatía y el consiguiente descreimiento de la participación puedan crear bolsones electorales disponibles para que liderazgos carismáticos los movilicen con planteamientos antipolíticos.

De modo que, aunque el paisaje político no sufra fuertes modificaciones, la posibilidad de una profundización de la democracia no parece demasiado factible. La sensación de malestar hacia el funcionamiento del sistema político parece reflejar la incapacidad de éste para satisfacer la extendida demanda de incorporación a los beneficios de la modernidad; constituyéndose así en la mayor amenaza al actual régimen político.

Tomás Moulian considera que tanta moderación por parte de los diferentes partidos favorece esta apatía, no solo porque no es creíble, sino porque tanta redundancia diluye la identidad de las fuerzas en competencia, produciéndose la situación en que "...ante un sistema tan homogéneo, en el cual detrás de las etiquetas están los mismos contenidos, la política parece ociosa..." (Moulian, 1997:76).

Por otra parte, las elecciones de 1999 representan una oportunidad para el candidato de la derecha Joaquín Lavín, que apuesta a la superación del sistema de coaliciones basado en la fractura autoritarismo - democracia; para permitir la

emergencia de un liderazgo personal, con posibilidades de éxito en una contienda presidencial. Se intenta un voto personalizado "...donde los electores eligen en función de aquellos rasgos de los candidatos que les resultan atractivas en la coyuntura de la elección, sin mayor referencia a lealtades históricas, ni a disciplinas políticas de partidos y coaliciones..." (Tironi, 1998:144).

Asimismo, existen posibilidades ciertas de tensión dentro de la Concertación frente al favoritismo ante la opinión pública que ostenta el socialista Ricardo Lagos. No es fácil para un partido con una gran estructura organizativa que ha predominado durante diez años resignar el puesto de presidente. Además, no está claro cómo podría ser la relación que un presidente del Partido Socialista tendría con los grupos empresariales más desarrollados y con los seguidores del pinochetismo; sectores con los que la Democracia Cristiana, tanto en los gobiernos de Aylwin y Frei, ha logrado generar una relación armónica.

Por ello, diferentes personajes de la derecha intentan generar divisiones dentro de la coalición gobernante. En ese intento pueden incluirse las afirmaciones del senador vitalicio Augusto Pinochet, quien apoyó al candidato demócrata cristiano Andrés Zaldívar, al que calificó de hombre capaz, inteligente y sabio, y afirmó que haría un buen papel en el gobierno (El Mercurio, 13 de Septiembre de 1998). Esas declaraciones no solo estuvieron dirigidas en tono crítico a los candidatos de la derecha por su falta de vitalidad, sino que también constituyeron una clara señal que el pinochetismo hará todo lo posible para evitar que un socialista llegue al poder.

Asimismo, la Unión Democrática Independiente plantea cambiar algunos de sus rasgos más irritativos, con el fin de llegar a establecer una coalición con la Democracia Cristiana, o al menos con algunos sectores de ella que pudieran quedar marginados de la Concertación en caso que el candidato socialista Ricardo Lagos triunfe en la elección interna (El Mercurio, 30 de Agosto de 1998).

Finalmente, un suceso que puede cambiar la dinámica de la consolidación democrática chilena es la detención del ex presidente Augusto Pinochet en Inglaterra, ante el pedido del juez español Garzón Valdez. Esto no solo ha causado ciertas tensiones en el seno de la Concertación ante el apoyo de la Democracia Cristiana a las gestiones del gobierno chileno ante el británico y el emplazamiento a Lagos para que aclare su posición en este caso (El Mercurio, 20 de Octubre de 1998), sino que también ha causado un fuerte debate en la derecha chilena.

Esta disputa en el interior de los sectores que se consideran herederos del régimen pinochetista puede ser importante para el futuro de la democracia, ya que se corre el riesgo que se produzca un fortalecimiento de los grupos más "duros" en desmedro de aquellos que postulan la necesidad de una postura más negociadora con el gobierno. Desde diferentes sectores se plantea que "...cuando la suerte de Pinochet se pone en juego los medios tonos tienden a desaparecer (Suplemento Zona de Clarín, 28 de Marzo de 1999). De ese modo, la posibilidad de arribar a determinados acuerdos para modificar algunos de los constreñimientos dejados por Pinochet al régimen democrático, se ve disminuida. En tal sentido, la detención de Pinochet, puede serle útil a la derecha para rearticularse, luego de nueve años de derrotas electorales, en busca de un interés y una figura simbólica común (Wolter, 1999).

Luego de la detención del ex mandatario en Londres, en Chile se incrementó el clima de tensión con la aparición de hombres encapuchados, amenazas de muerte y autos sin patente estacionados frente a las casas. Por ello, el gobierno debió destinar más de 300 carabineros para custodiar la tranquilidad en las calles. Además, aunque los jefes militares reafirmaron su respaldo al presidente Frei, se multiplicaron las reuniones para solicitarle al gobierno que redoble la presión sobre Inglaterra para lograr la liberación de Pinochet (Clarín, 28 de Octubre de 1998). Dicha situación se profundizó por los conflictos que se habían generado el 11 de Septiembre, aniversario del golpe militar de 1973, entre sectores ligados con el Partido Comunista y los carabineros (El Mercurio, 15 de Septiembre de 1998). Por otra parte, en las cuatro reuniones por el caso Pinochet del Consejo de Seguridad Nacional, consagraron a esa instancia como un espacio de cogobierno sobre materias importantes en la gestión del Estado, echando atrás toda la estrategia de los gobiernos de rutinizarla apenas como un instrumento de consulta (Wolter, 1999).

Todo esto nos lleva a pensar que en Chile la democracia, aunque no corre peligro (fundamentalmente porque no existen grupos antisistema importantes), tendrá con seguridad enormes problemas para su profundización, pudiendo por ello generar fenómenos de desmovilización y apatía que le quiten progresivamente fuerza para producir cambios.

Los actores sociales y los partidos políticos han variado sustancialmente sus características y sus comportamientos, por lo que desde la instauración del régimen democrático disminuyeron las tensiones producidas por los enfrentamientos ideológicos y programáticos, existiendo un alto nivel de consenso en torno a las políticas gubernamentales, a partir del cual adquieren relevancia las características personales de los candidatos (Lagos y Zaldívar dentro de la Concertación y particularmente Joaquín Lavín entre los partidarios de la derecha). Solamente el Partido Comunista (con alrededor del 10% de los votos, aunque con mayor peso en Santiago de Chile), y algunos grupos radicalizados de ultraizquierda o bien de derecha antidemocrática impugnan aspectos centrales del modelo vigente en el país actualmente, encontrándose por otro lado grupos marginales, que se califican como apartídanos que manifiestan un rechazo al régimen, aunque sin plantear un modelo alternativo.

Ante esto, un autor muy crítico de las características que adoptó el proceso de democratización chileno, alerta sobre los riesgos de una democracia tutelada que se mueve en una "jaula de hierro", en la que determinados temas quedan fuera de la discusión pública. Plantea que ante la no discusión de los nudos esenciales del modelo de acumulación y sociabilidad "... es la política misma la que agoniza, para ser reemplazada por la decisión tecnocrática, sustentada en un indisputable (pero no indiscutible) cientificidad (Moulian, 1997:58). Considera que tanta moderación obligatoria perjudica al sistema de partidos, generando demasiada redundancia en las propuestas de las fuerzas en competencia y volviendo irrelevante la política.

Bibliografía

- Casas, Juan Carlos: *Nuevas Políticas y nuevos políticos en América Latina*, Ed. Atlántida, Buenos Aires, 1991.

- Corvalán, Luis: *De lo vivido y lo peleado*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1997.
- Garreión, Manuel: “La evolución política en el régimen militar chileno”, en O’Donnell, Schimifiter y Whitehead: *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1988.
- Halperín Donghi, Tulio: *Historia Contemporánea de América Latina*, Alianza Editorial, 1986.
- Huntington, Samuel: *La tercera ola*, Sudamericana, Buenos Aires, 1994.
- Lopreite, Débora y Tula, María Susana: “Cambios y continuidades en la política y economía chilena”, en Pinto, Julio (comp.), *Las nuevas democracias en el cono sur*, Oficina de publicaciones del CBC, Buenos Aires, 1996.
- Marín Vicuña, Arturo: “El sistema binominal como una opción para el centro político”, en *Revista Política* N° 9, Universidad de Chile, 1986.
- Peña Aguilar, Jorge: “Chile: transición, régimen político y democracia”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas, 1998.
- Raczinski, Dagmar; Vergara, Pilar y Vergara Carlos, *Políticas públicas de integración social. El caso chileno*, Proyecto CLACSO sobre estrategias de gobernabilidad, 1993.
- Scholnik, Mariana: “Modelos de desarrollo, políticas sociales y pobreza en Chile”, en Bombarolo Félix y Caride Horacio (comp.), *Pobreza y modelos de desarrollo en América Latina*, Banco Mundial, Argentina, 1994.
- Moulián, Tomás: *Chile actual, anatomía de un mito*, Arcis - LOM, Santiago de Chile, 1997.
- Sartori, Giovanni: *Partidos y sistemas de partidos*, Alianza Universidad, Madrid, 1992.
- Scully, Timothy: “Las bases políticas de la liberalización económica en Chile”, en *Boletín SAAP* N°7, Primavera de 1998.
- Scully, Timothy: *Los partidos de centro y la evolución política chilena*, CIEPLAN-Notre Dame, Santiago de Chile, 1991.
- Tironi, Eugenio: *El régimen autoritario*, Dolmen, Santiago de Chile, 1997.
- Valenzuela, Arturo: “Orígenes y características del sistema de partidos en Chile. Proposición para un gobierno parlamentario”, en *Estudios Públicos* N° 18, Centro de Estudios Políticos, Chile, Otoño de 1985.
- Wolter, Matilde: “Chile. Pinochet sigue marcando”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 159, Caracas, Enero-Febrero de 1999.